

## EVIDENCIAS

CONTRATISTA:

**JOSE MANUEL ALARCON VALENCIA**

CONTRATO:

**100.8.4.295.2025**

FECHA DE INICIO:

**27 DE ENERO DE 2025**

FECHA DE TERMINACIÓN:

**31 DE DICIEMBRE DE 2025**

**OBJETO DEL CONTRATO:** Prestar Servicios Profesionales en la Unidad de Apoyo Normativo del Honorable concejal Tania Fernández Sánchez en el Concejo Santiago de Cali.

### ACTIVIDAD CONTRACTUAL No 1

1. Apoyar profesionalmente en diversos temas, a la comunidad que se acerque a la oficina del Honorable concejal
  - Realicé la acción de tutela para la señora Hermandina Noguera Leyton por la no respuesta al derecho de petición radicado el día 1 de julio de 2025 presentó ante el Departamento Administrativo de Hacienda de Santiago de Cali un derecho de petición solicitando la prescripción de las vigencias fiscales del impuesto predial unificado correspondientes al predio con ID 421419, años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017 y 2019, con fundamento en los artículos 2512 del C.C., 817 y 638 del Estatuto Tributario Nacional y jurisprudencia aplicable.

### EVIDENCIAS No 1

ACCIÓN DE TUTELA

(Art. 86 C.P. y Decreto 2591 de 1991)

Señores

Juez Constitucional

(E. S. D.)

Referencia: Acción de tutela para la protección del derecho fundamental de petición.

Accionante: Hermandina Noguera Leyton, C.C. 34.531.756 de La Vega (Cauca).

Accionado: Departamento Administrativo de Hacienda – Oficina Técnica Operativa de Cobro Coactivo, Municipio de Santiago de Cali.

## I. HECHOS

### PRIMERO

El día 1 de julio de 2025 presenté ante el Departamento Administrativo de Hacienda de Santiago de Cali un derecho de petición solicitando la prescripción de las vigencias fiscales del impuesto predial unificado correspondientes al predio con ID 421419, años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017 y 2019, con fundamento en los artículos 2512 del C.C., 817 y 638 del Estatuto Tributario Nacional y jurisprudencia aplicable.

Hasta la fecha de presentación de esta acción han transcurrido más de 30 hábiles sin que se me haya notificado respuesta alguna, incumpléndose el término legal de respuesta previsto en la Ley 1755 de 2015.

Esta omisión vulnera mi derecho fundamental de petición, así como mi derecho al debido proceso administrativo, y me genera afectación económica, dado que no he podido resolver mi situación tributaria para efectos de saneamiento patrimonial.

## **SEGUNDO:**

De conformidad con el artículo 91- 3 de la Ley 1437, por haber transcurrido más de cinco años de la expedición de la factura de cobro sin haberse ejecutado, los actos administrativos han perdido fuerza ejecutoria y por lo tanto la administración debe declarar la prescripción de dichas obligaciones según normatividad:

### 2.1 Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo (C.P.A.C.A.).

Artículos 93 y 99.

### 2.2 Estatuto Tributario Nacional (E.T.N.):

#### **Art. 817. Término de prescripción de la acción de cobro.**

**La acción de cobro de las obligaciones fiscales, prescribe en el término de cinco (5) años, contados a partir de:**

1. La fecha de vencimiento del término para declarar, fijado por el Gobierno Nacional, para las declaraciones presentadas oportunamente.
2. La fecha de presentación de la declaración, en el caso de las presentadas en forma extemporánea.
3. La fecha de presentación de la declaración de corrección, en relación con los mayores valores.
4. La fecha de ejecutoria del respectivo acto administrativo de determinación o discusión. La competencia para decretar la prescripción de la acción de cobro será de los Administradores de Impuestos o de Impuestos y Aduanas Nacionales respectivos, o de los servidores públicos de la respectiva administración en quien estos deleguen dicha facultad y será decretada de oficio o a petición de parte. Se resalta y subraya por interés

#### **Art. 823. Procedimiento administrativo coactivo.**

Para el cobro coactivo de las deudas fiscales por concepto de impuestos, anticipos, retenciones, intereses y sanciones, de competencia de la Dirección General de Impuestos Nacionales (Hoy UAE Dirección de Impuestos y aduanas nacionales), deberá seguirse el procedimiento administrativo coactivo que se establece en los artículos siguientes.

#### **Art. 826. Mandamiento de pago.**

El funcionario competente para exigir el cobro coactivo, producirá el mandamiento de pago ordenando la cancelación de las obligaciones pendientes más los intereses respectivos. Este mandamiento se notificará personalmente al deudor, previa citación para que comparezca en un término de diez (10) días. Si vencido el término no comparece, el mandamiento ejecutivo se notificará por correo. En la misma forma se notificará el mandamiento ejecutivo a los herederos del deudor y a los deudores solidarios.

Cuando la notificación del mandamiento ejecutivo se haga por correo, deberá informarse de ello por cualquier medio de comunicación del lugar. La omisión de esta formalidad, no invalida la notificación efectuada.

PAR. El mandamiento de pago podrá referirse a más de un título ejecutivo del mismo deudor.

## Art. 829. Ejecutoria de los actos.

Se entienden ejecutoriados los actos administrativos que sirven de fundamento al cobro coactivo:

1. Cuando contra ellos no proceda recurso alguno.
2. Cuando vencido el término para interponer los recursos, no se hayan interpuesto o no se presenten en debida forma.
3. Cuando se renuncie expresamente a los recursos o se desista de ellos, y
4. Cuando los recursos interpuestos en la vía gubernativa o las acciones de restablecimiento del derecho o de revisión de impuestos se hayan decidido en forma definitiva, según el caso.

## t. 831. Excepciones.

Contra el mandamiento de pago procederán las siguientes excepciones:

1. El pago efectivo.
2. La existencia de acuerdo de pago.
3. La falta de ejecutoria del título.
4. La pérdida de ejecutoria del título por revocación o suspensión provisional del acto administrativo, hecha por autoridad competente.
5. La interposición de demandas de restablecimiento del derecho o de proceso de revisión de impuestos, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
6. La prescripción de la acción de cobro, y
7. La falta de título ejecutivo o incompetencia del funcionario que lo profirió.

PAR. Contra el mandamiento de pago que vincule los deudores solidarios procederán además, las siguientes excepciones:

1. La calidad de deudor solidario.
2. La indebida tasación del monto de la deuda.”

**Art. 638. Prescripción de la facultad para imponer sanciones (Caducidad de la acción tributaria para el Estado.** Cuando las sanciones se impongan en liquidaciones oficiales, la facultad para imponerlas prescribe en el mismo término que existe para practicar la respectiva liquidación oficial...)

### 2.6 Sobre Prescripción y caducidad:

Extraído del Documento e la Procuraduría General de la Nación: Guía Básica de Tributos Municipales. Abril 2018.

[https://www.procuraduria.gov.co/iemp/media/file/publicaciones/Gu%C3%ADa%20B%C3%A1sica%20de%20Tributos%20Municipales%20\(5\).pdf](https://www.procuraduria.gov.co/iemp/media/file/publicaciones/Gu%C3%ADa%20B%C3%A1sica%20de%20Tributos%20Municipales%20(5).pdf).

“(…)La prescripción es un modo para el surgimiento de derechos subjetivos (prescripción adquisitiva) o para extinguir obligaciones (prescripción extintiva). Esta institución jurídica otorga derechos con base en la ocurrencia de hechos. No opera por el simple paso del tiempo, sino que tiene en consideración elementos subjetivos como el ejercicio o inactividad de un derecho subjetivo. Es renunciable y debe ser alegada por quien busca beneficiarse de ella.

La caducidad es una institución jurídica procesal a través del cual, el legislador limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia.

La caducidad impide el ejercicio de la acción, por lo cual, cuando se ha configurado no puede iniciarse válidamente el proceso. Es de orden público y por ello es irrenunciable, y puede ser declarada de oficio por el juez cuando verifica su ocurrencia<sup>63</sup> (63 Sentencia SU 498 de 2016 de la Corte Constitucional). La razón principal de ese término es la seguridad jurídica y la garantía de los derechos subjetivos de los particulares y de la administración. En cuanto a la seguridad jurídica, porque debe existir un momento definitivo para que se consoliden los actos administrativos que han creado, extinguido o modificado situaciones jurídicas de carácter particular. También porque tales actos que definen situaciones o reconocen o niegan derechos a los particulares no pueden ser indefinidamente susceptibles de cuestionamiento en sede administrativa o jurisdiccional<sup>64</sup> (64 Sentencia del Consejo de Estado del 23 de octubre de 2014, Sección 4ª, expediente 18872). La caducidad, como presupuesto procesal de la acción, debe examinarse por el juez al momento de decidir sobre la admisión de la demanda.

Mientras la caducidad es un presupuesto procesal de la acción y hace referencia al ejercicio de ese derecho dentro de los plazos fijados por el Legislador, so pena de impedir el establecimiento de una relación jurídica procesal válida, la prescripción hace referencia a un modo para el surgimiento de derechos o extinción de obligaciones<sup>65</sup> (65 Sentencia SU 498 de 2016 de la Corte Constitucional)".

## 2.7 Sobre la caducidad en la acción de cobro en los impuestos del estado:

<https://www.lexdir.co/guia/la-caducidad-en-la-accion-de-cobro-en-los-impuestos-del-estado-3524/>.

El abogado Dr. **Ronald Romero**, especializado en Derecho Civil, en este portal. sostiene:

"(...)Todos los colombianos que se hayan atrasado en el pago de impuestos a nivel nacional, tienen el derecho a que se les prescriban si el Estado no inicia un proceso de cobro antes de 5 ( 5 AÑOS ), el Estado debe decretar la prescripcion de oficio o a petición de parte, hay miles de millones de pesos que se pueden dejar de pagar, entendiendo bien este tema".

"LA PRESCRIPCION EN LA ACCION DE COBRO:

En primera instancia hago referencia a la prescripción definida por el código civil de la siguiente manera

"ART 2512.- la Prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las acciones o derechos ajenos, por haberse poseído las cosas y no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales.

Se prescribe una acción o derecho, cuando se extingue por la prescripción".

La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en Sentencia de octubre 20 de 1971, considero:

"El artículo 1512 del Código Civil distingue la prescripción adquisitiva o usucapión, de la extintiva, la primera es un modo de adquirir el dominio de las cosas ajenas que están en el comercio, por haber sido poseídas con las condiciones legales; la segunda es un modo de extinguir las acciones o derechos ajenos por no haberse ejercido durante cierto tiempo y siempre que concurran los demás requisitos de la ley. Aquella dada su naturaleza, ha de hacerse valer como pretensión a efecto de obtener la declaración judicial de que el bien pertenece al demandante por haberlo adquirido por el modo de la usucapión; la otra, en cambio, constituye una excepción encaminada a paralizar la acción del demandante, y debe alegarse expresamente por el demandado".

En materia tributaria encontramos que la palabra prescripción se encuentra señalada en el Estatuto Tributario en dos artículos diferentes a saber, el artículo 638 y el artículo 817:

**“Artículo 638. Prescripción de la facultad para imponer sanciones. Modificado por el artículo 64 de la ley 6ª de 1992.** Cuando las sanciones se impongan en liquidaciones oficiales, la facultad de imponerlas prescribe en el mismo término que existe para practicar la respectiva liquidación oficial. Cuando las sanciones se impongan con resolución independiente, deberá

formularse el pliego de cargos correspondiente, dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se presentó la declaración de renta y complementarios o de ingresos y patrimonio, del periodo durante el cual ocurrió la irregularidad sancionable o cesó la irregularidad, para el caso de las infracciones continuadas. Salvo en el caso de la sanción por no declarar, de los intereses de mora, y de las sanciones previstas en los artículos 659, 659-1 y 660 del estatuto tributario, las cuales prescriben en el término de 5 años...(…)”

**“Artículo 817. Término de prescripción de la acción de cobro. Modificado por el artículo 86 de la ley 788 de 2002.** La acción de cobro de las obligaciones fiscales, prescribe en el término de (5) años, contados a partir de:

1. La fecha del vencimiento del término para declarar, fijado por el Gobierno Nacional, para las declaraciones presentadas oportunamente.
2. La fecha de presentación de la declaración, en el caso de las presentadas en forma extemporánea.
3. La fecha de presentación de la declaración de corrección, en relación con los mayores valores.
4. La fecha de ejecutoria del respectivo acto administrativo de determinación o discusión.

**Modificado por el artículo 8 de la ley 1066 de julio 29 de 2006.** La competencia para decretar la prescripción de la acción de cobro será de los Administradores de impuestos o de Impuestos y Aduanas Nacionales respectivos, y será decretada de oficio o a petición de parte. “

Esta disposición nos señala que el término de prescripción es de cinco (5) años contados a partir de la fecha en que se hizo exigible la obligación tributaria.

Sobre estas disposiciones es necesario precisar que las dos normas utilizan la misma terminología, (prescripción) la misma debe verse en dos caminos diferentes, la señalada en el artículo **817** que corresponde al caso de este derecho de petición, y que versa sobre la prescripción en la obligación de cobro, que puede ser utilizada como excepción al mandamiento de pago y de otro lado la consignada en el artículo **638 del estatuto tributario (Art. 638. Prescripción de la facultad para imponer sanciones.** Cuando las sanciones se impongan en liquidaciones oficiales, la facultad para imponerlas prescribe en el mismo término que existe para practicar la respectiva liquidación oficial...) que aunque es denominada por este como “prescripción” corresponde realmente a la caducidad de la acción de fiscalización tributaria, que es el término que posee la administración tributaria nacional, departamental, distrital, y municipal, para realizar un proceso de determinación oficial a los contribuyentes que voluntariamente y dentro de los plazos señalados

**no cumplieron con la obligación de declarar y pagar un determinado impuesto.**

Esta caducidad (prescripción) ocurre porque se extingue para el ente tributario como sujeto activo del tributo el derecho de exigir la declaración y pago del mismo y por consiguiente no puede ejercer las acciones de fiscalización que obliguen al contribuyente a presentar su declaración.

Conforme a lo anterior, la obligación de declarar, vista desde la perspectiva impositiva de la administración, esto es, como el poder exorbitante de exigir que el contribuyente cumpla con una de sus obligaciones tributarias cual es la autoliquidación o determinación del tributo, o para suplir tal omisión con un acto oficial, Caduca ( prescribe) en el término de (5) años contados desde que se hizo exigible la obligación, esto es, desde que venció el plazo máximo otorgado por la administración para cumplir oportunamente con el deber.

Por último, es importante recordar a los entes tributarios territoriales que no les está permitido (como lo han realizado algunos) el cambiar los términos de prescripción de la obligación tributaria, tal y como lo ha expresado el Consejo de Estado en varios fallos”.

TECERO: PETICION:

Señor Secretario de Hacienda:

Teniendo en cuenta los hechos y fundamentos de derecho, con mucha prudencia le pido, ordenar a quien corresponda sea aplicada en favor del señor OMAR SAUL PERAFAN ALVEAR, la prescripción correspondiente a las vigencias fiscales del impuesto predial de los años 2019 hacia atrás, como ut supra, se solicitó, con fundamento en los artículos. 2512 del C.C. y 817 del E.T.N., por haber transcurrido más de cinco (5) años y no haberse realizado el proceso coactivo con mandamiento de pago, o sea que no se ejercieron acciones efectivas para hacer realidad el derecho de recaudar el dinero debido en impuestos, quedando como efecto, la exoneración en el contribuyente al pago de los impuestos mencionados.

## II. DERECHOS FUNDAMENTALES VULNERADOS

- Derecho fundamental de petición (art. 23 de la Constitución Política).
- Derecho al debido proceso administrativo (art. 29 C.P.).
- Derecho al mínimo vital (en conexidad, por afectación económica grave).

## III. PRETENSIONES

1. Que se ampare mi derecho fundamental de petición y se ordene al Departamento Administrativo de Hacienda – Oficina Técnica Operativa de Cobro Coactivo de Santiago de Cali dar respuesta de fondo, clara, precisa y congruente a la solicitud radicada el día 1 de julio de 2025 sobre la prescripción de las obligaciones tributarias mencionadas.
2. Que dicha respuesta se emita dentro del término de 48 horas contadas a partir de la notificación del fallo.

## IV. PRUEBAS

- Copia del derecho de petición radicado el día 1 de julio de 2025 dirigido a la entidad accionada.
- Copia de la factura No. 000097548813.
- Copia del documento que acredita la representación oficiosa del señor Omar Saúl Perafán Alvear (Q.E.P.D.).
- Copia de la cédula de ciudadanía del accionante.



V. JURAMENTO

Bajo la gravedad del juramento manifiesto que no he presentado otra acción de tutela por los mismos hechos y derechos aquí invocados.

VI. NOTIFICACIONES

Accionante: Calle 112 No 27G-25 celular 3104100850, email: j.luis96dominguez@gmail.com, en esta ciudad.

Accionado: Departamento Administrativo de Hacienda – Oficina Técnica Operativa de Cobro Coactivo, Santiago de Cali.

Atentamente,

Hernandina Noguera Leyton  
C.C. 34.531.756 de La Vega (Cauca)



República de Colombia  
Rama Judicial del Poder Público  
Consejo Superior de la Judicatura  
Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca

JUZGADO TREINTA CIVIL MUNICIPAL DE CALI

Santiago de Cali, dos (02) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Sentencia # T-0328

Radicación: 76001-40-03-030-2025-00955-00

Tipo de Proceso: AMPARO CONSTITUCIONAL

Accionante(s): HERMANDINA NOGUERA LEYTON – CC. No. 34531756

Accionado(s): DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA – OFICINA TÉCNICA OPERATIVA DE COBRO COACTIVO DISTRITAL CALI

Vinculados: ADMINISTRACIÓN DISTRITAL DE CALI (V)

Trámite a resolver: SENTENCIA

Procede esta agencia judicial a decidir la solicitud de amparo formulada por la ciudadana **HERMANDINA NOGUERA LEYTON** titular de la C.C. **34531756**, quien invoca la protección del derecho fundamental de “petición”, presuntamente vulnerados por el **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA – OFICINA TÉCNICA OPERATIVA DE COBRO COACTIVO DISTRITAL CALI**.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda de tutela.

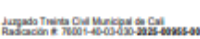
La parte actora pretende mediante este trámite tutelar que se ordene a la entidad accionada resolverle de fondo la petición que data del 01 de julio de 2025 y quien afirma haberla radicado ante la misma el 04 de julio de 2025, bajo radicación No. 202541730101209982 aseverando que a la presentación del presente trámite no ha recibido contestación al respecto.

2.- Admisión y Contestación.


Una vez correspondió por reparto a este Juzgado la presente solicitud de amparo, se admitió mediante providencia fechada a 21 de agosto de 2025 (archivo 003 del expediente digital), en la misma providencia se vinculó a la ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI, lo cual se notificó vía correo electrónico mediante comunicaciones que datan del 22 de agosto del corrido (archivo 004 del expediente digital).

El DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA – OFICINA TÉCNICA OPERATIVA DE COBRO COACTIVO DISTRITAL CALI mediante memorial (archivo 005 del expediente digital), manifestó que, en respuesta a los hechos y las pretensiones del accionante en la acción de tutela incoada, se permite indicar lo siguiente:

“[...] 1. La señora **Hernandina Noguera Leyton**, identificada con cédula de ciudadanía No. **34.531.756**, quien actúa en calidad de heredera del señor **Omar Saúl Perafán Alvear** (Q. E. P. D.), propietario del predio No. **R020500440000**, con Id No. **421419**, elevó derecho de petición en el Sistema



Juzgado Tercero Civil Municipal de Cali  
Radicación # 76001-40-03-030-2025-00955-00



de Gestión Documental Orfeo del Distrito de Santiago de Cali, al cual le fue asignado el radicado No. 202541730101209982 del 04 de julio de 2025.

2. En el escrito, la peticionaria solicitó la prescripción del Impuesto Predial Unificado correspondiente a las vigencias 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017 y 2019.

3. En razón de lo anterior, este despacho dio respuesta a la petición mediante el oficio No. 202541310320084901 del 20 de agosto del 2025, notificado al correo electrónico aportado por el peticionario para notificaciones en el derecho de petición y escrito de tutela: maurcoamlin37@gmail.com, el día 21 de agosto del 2025.”

Por su parte, la **ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI**, habiendo sido notificada en debida forma (archivo 004 del expediente digital), dentro del término legal para presentar su informe guardó silencio.

II CONSIDERACIONES

1.- Competencia.

Correspondió al Despacho conocer de la presente acción constitucional en virtud de la competencia dispuesta en los artículos 37 y 42 del Decreto 2591 de 1991 en concordancia con lo indicado en el Decreto 1983 de 2017.

2.- Problema Jurídico.

Se debe determinar si existe o no vulneración del derecho fundamental de petición de **HERMANDINA NOGUERA LEYTON** por parte del **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA – OFICINA TÉCNICA OPERATIVA DE COBRO COACTIVO DISTRITAL CALI** al omitir dar respuesta de fondo a la solicitud que data del 01 de julio de 2025 y radicada ante la referida entidad el 04 de julio de 2025, bajo radicación No. 202541730101209982.

3.- Tesis del Despacho.

Dado que el **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA – OFICINA TÉCNICA OPERATIVA DE COBRO COACTIVO DISTRITAL CALI**, dentro del trámite de la presente acción constitucional, emitió contestación de fondo a la solicitud elevada por la parte accionante, esta Judicatura considera que se han superado los hechos que generaron la vulneración alegada.

4.- Estudio del caso.

Para efectos de abordar el estudio del caso puesto a consideración de este operador judicial, sea lo primero rememorar que toda persona tiene derecho a un recurso efectivo para que se amparen sus derechos fundamentales reconocidos en la Constitución o la Ley<sup>1</sup>. Para este efecto, la acción de tutela<sup>2</sup> está consagrada en el artículo 86 de nuestra Constitución Política y reglamentada en los Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992, señalándose en el primero de estos, en su artículo 6º las

<sup>1</sup> Art. 8º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Art. 2º y 8º Convención Americana de los Derechos Humanos  
<sup>2</sup> “pretende como un derecho subjetivo específico y directo que tiene por objeto: “reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí mismo o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en las casos que señale este Decreto”.

<sup>3</sup> “[...] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélos se utilicen como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante [...]”



causales de improcedencia de la acción de tutela, las cuales deben verificarse antes de penetrar en el estudio de fondo, anóni que, además, deberá acompañarse al principio de inmediatez como requisito de procedibilidad decantado por la Corte Constitucional<sup>16</sup>.

Explicado lo anterior y una vez confrontados los hechos y las pruebas aducidos en la presente acción constitucional, se advierte que la misma se acompaña a los lineamientos de subsistencia e inmediatez, pues, de una parte, es el mecanismo idóneo para invocar la protección del derecho de petición de la parte accionante, y, de otro lado, se interpuso en un lapso de tiempo razonable, pues la conducta omisiva que ha generado la vulneración endigada a la entidad accionada se mantiene vigente.

En ese entendido, el atención al derecho de petición invocado como vulnerado, se tiene que es un derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política en la que se dispone lo siguiente: "Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respecto de cualquier asunto de interés general o particular a obtener pronta solución". Este canon expresa materialmente la salvaguarda de otras garantías fundamentales, como lo son la igualdad, el debido proceso, acceso a la administración de justicia, entre otros, en tanto que representa la facultad del acceso a la información que le asiste a toda persona, tal como lo prevé el artículo 18 de la Constitución, en el sentido de que la información en la resolución de una petición completa y oportuna de la información requerida.

Ahora, en cuanto a las características esenciales de la garantía fundamental de maras, es menester señalar que su núcleo cardinal se encuentra en la resolución y contestación completa y oportuna de la información averiguada<sup>4</sup>, y en este entendido, es evidente que el derecho de petición no solo encierra la posibilidad de presentar solicitudes respetuosas a autoridades y particulares, conforme lo señala la ley y la jurisprudencia, y en efecto obtener respuesta oportuna, clara, precisa, sino que también es garantía de transparencia, por lo tanto, la renuencia a suministrar contestación conlleva como consecuencia, la vulneración del derecho de petición.

Bajo ese contexto, se advierte por esta agencia judicial de las probanzas obrantes en el expediente, que efectivamente el accionante radicó de manera virtual ante el **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA – OFICINA TÉCNICA OPERATIVA DE COBRO COACTIVO DISTRITAL CALI**, el **04 de julio de 2025**, bajo radicación No. **202541730110209982** una solicitud relativa a la prescripción de impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017 y 2019 (archivo 002 f1010 a 018 expediente digital).

Descendiendo al caso concreto, si bien es cierto que la parte tutelante consideró no tener más opción que promover esta acción de amparo para invocar la protección

<sup>1</sup> Este principio presupone que entre el acaecimiento del hecho o la omisión que se aduce como fuente de afectación a las prerrogativas fundamentales de los asociados, no hubiere transcurrido un término prolongado; pues en efecto, dicha Corporación ha señalado que los criterios de razonabilidad y cercanía para interponer la tutela habrán de valorarse desde las

responsabilidades de cada caso concreto. En consecuencia, el presente estudio se ha basado lo siguiente: "El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa, generando a su vez otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación pública y a la libertad de expresión." El núcleo esencial del derecho de petición es el derecho de acceso a la información pública, el cual comprende: "la información clara, oportuna, precisa y congruente con la solicitud; (ii) la respuesta debe producirse dentro de un plazo establecido; (iii) el acceso debe ser gratuito; (iv) la información debe ser entregada en el idioma que el solicitante requiera; (v) el acceso a la información debe ser en cualquier formato electrónico; (vi) este derecho no sufre ningún tipo de aplicación retroactiva; (vii) el acceso a la información es un derecho absoluto; (viii) el silencio administrativo negativo, entendido como un mecanismo para agotar la vía gubernativa y acceder a la vía judicial; (ix) el silencio administrativo positivo, entendido como un mecanismo para agotar la vía gubernativa y acceder a la vía judicial; (x) la prueba incontestable de que se ha violado el derecho de petición; (xi) el derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa; (xii) la falta de competencia de la entidad ante quien se plantea, no es causa de denegación de respuesta".



de sus derechos fundamentales, como ya se ha expuesto, sus pretensiones fueron satisfechas por parte del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA – OFICINA TÉCNICA OPERATIVA DE COBRO COACTIVO DISTRITAL CALI durante el periodo con el que este Juez Constitucional cuenta para proferir el fallo correspondiente, toda vez que se demostró ante el despacho haber dado respuesta a la petición de la aconante

Aparte, el Despacho evidencia en el informe allegado dentro del trámite de tutela que la contestación fue notificada de manera efectiva el día 22 de agosto de 2025 siendo las 12:36 horas, por medio del correo electrónico aportado por la parte accionante en el escrito de petición, como de tutela, el cual corresponde a [mjauocarrillo37@gmail.com](mailto:mjauocarrillo37@gmail.com).

En consideración a lo antes expuesto, la Corte Constitucional en Sentencia T-058 de 2021, ha señalado que:

... el juez de tutela carecerá de competencia sobre la materia cuando no exista un objeto jurídico sobre el cual pronunciarse. Esto es, en el caso en que se presente la carencia actual de objeto. De acuerdo con la jurisprudencia de esta Corte, se evidenciará la misma por tres circunstancias: i) hecho sobreviniente; ii) dolo consumado o iii) hecho superado. Este último se refiere a aquellos casos en donde las pretensiones de los accionantes pierden vigencia, por cuanto se dio cumplimiento a lo requerido de parte del sujeto accionado.

La carencia actual de objeto por hecho superado se configura cuando, entre la interposición de la acción y el fallo, se satisface por completo la pretensión objeto de amparo. Es decir que "por razones ajenas a la intervención del juez constitucional, desaparece la causa que originó la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales del peticionario."

Así pues, en el asunto analizado se presenta la carencia actual de objeto por hecho superado en lo que se refiere a la pretensión de vulneración del derecho fundamental de petición, puesto que la Secretaría de Movilidad de Cali, dio respuesta integral a la petición presentada, de forma que se satisfizo el derecho en su faceta subjetiva, misma que fue enviada al correo electrónico expuesto en la petición y en el escrito de tutela ([mauricio.v577@gmail.com](mailto:mauricio.v577@gmail.com)) como se observa en el (archivo 005 f1 004 a 007 del expediente digital).

Así las cosas, la conclusión a la que se llega radica es no acceder a la pretensión tutelar solicitada, no porque se concluyese una ausencia de violación de garantías fundamentales, sino porque ha operado el fenómeno que la doctrina constitucional ha denominado como "carencia actual de objeto por hecho superado", y en este entendido tampoco habrá lugar a pronunciarse de fondo respecto de las pretensiones de la parte accionante.

### III.- DECISIÓN.

En mérito de lo expuesto, el **JUZGADO TREINTA CIVIL MUNICIPAL DE CALI**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y actuando por autoridad de la Ley y la Constitución Política,

**RESOLVE:**

PRIMERO: NEGAR POR IMPROCEDENTE LA TUTELA incoada por HERMANDINA NOGUERA LEYTON por ausencia de vulneración actual del



derecho fundamental de petición, al haberse configurado un hecho superado conforme a lo analizado en la parte motiva de esta providencia.

**SEGUNDO:** Si este fallo no fuese recurrido, una vez ejecutoriado, **REMITIR** la actuación a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.

**TERCERO: NOTIFIQUESE** lo resuelto a los intervinientes de conformidad con el Art. 30 del Decreto 2591 /91. **CÚMPLASE**

PAULO ANDRÉS ZARAMA BENAVIDES  
JUEZ -

### Discussion

**Paulo Andres Zarama Benavides**  
Juez  
Juzgado Municipal  
Civil 20  
Calle 14 Norte, Barrio Centro

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527899 y el decreto sustancatorio 2364792

Código de verificación: 8a79b5d3d96b4a42117b2b4b64d4ccce4c485780e483d9bcb891a1779e4d5a

Descargue el archivo y valide este documento electrónico en la siguiente URL:  
<https://recursosjudicial.ramajudicial.gov.co/valida/electronica>



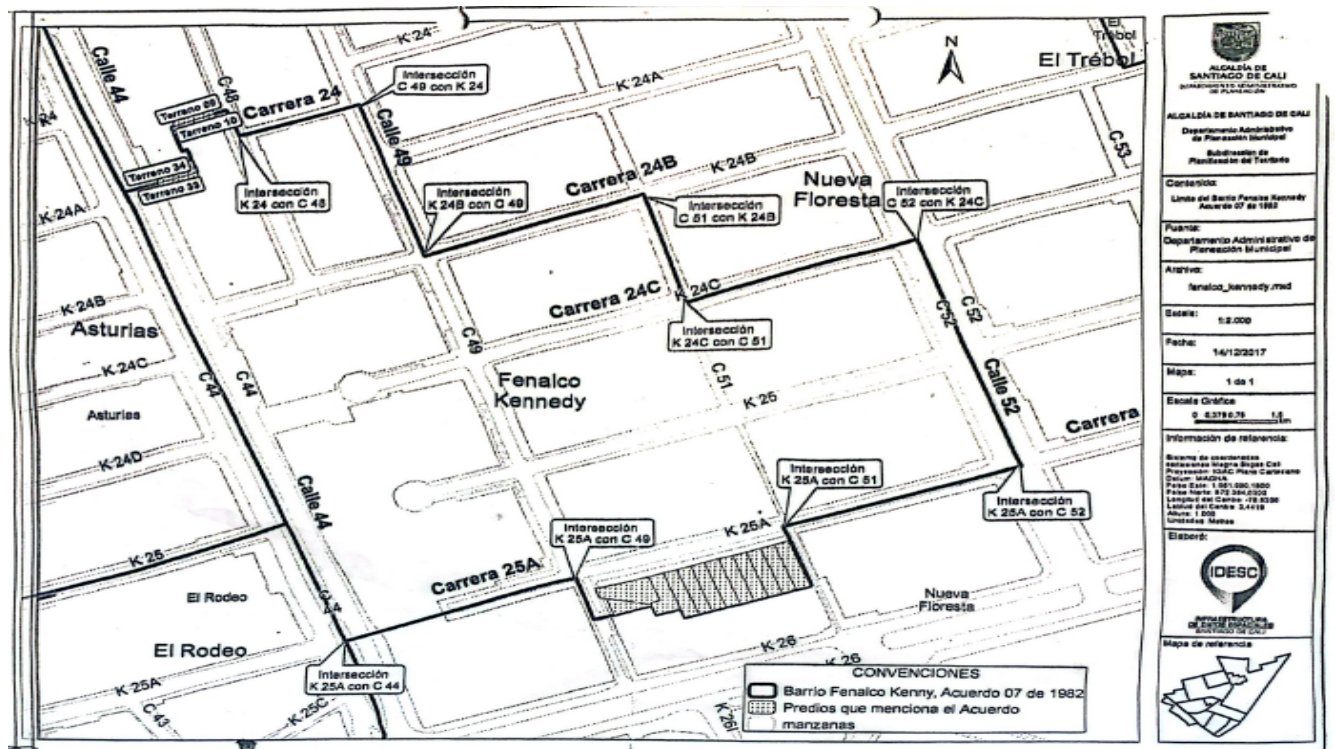
## ACTIVIDAD CONTRACTUAL No 2

2. Apoyar profesionalmente el análisis cuantitativo de los proyectos de acuerdo que se estudien en este periodo de tiempo.

- Asistí a la Comisión de Plan y Tierras para la continuación del estudio de Proyecto de acuerdo No 054 por el cual se actualizan o precisan límites territoriales realizada el día 5 de septiembre de 2025
- Asistí a las Plenarias extraordinarias de los días 5, 8, 9, 10 y 11 de septiembre de 2025

## EVIDENCIAS No 2

## EVIDENCIAS No 2



### ACTIVIDAD CONTRACTUAL No 3

3. Apoyar la evaluación de la gestión de la consejería para el periodo 2024 de la Honorable Concejal.
- Asistí a la comisión de Plan y Tierras a la Apertura de Estudio y el estudio del Proyecto de Acuerdo No. 060 de 2025 "Por el cual se autoriza al señor alcalde de Santiago de Cali, para la enajenación a título oneroso de los bienes inmuebles fiscales improductivos, los derechos en común y proindiviso adjudicados al distrito y los remanentes urbanos denominados retales derivados de las intervenciones de proyectos de infraestructura vial, y se dictan otras disposiciones".

### EVIDENCIAS No 3



### ACTIVIDAD CONTRACTUAL No 4

Asistir a las reuniones de trabajo convocadas por la Honorable concejal.

- Asistí a la reunión del equipo de trabajo para programar las visitas al territorio y escuchar las necesidades de sus habitantes y las posibles soluciones que desde el Concejo distrital se pueden gestionar

### EVIDENCIAS No 4





## ACTIVIDAD CONTRACTUAL No 5

4. Las demás actividades designadas para el cumplimiento del objeto del contrato.

- Asistí a los recorridos que adelantó la concejal Tania Fernández Sánchez en las comunas 3, 6 y 7 de Cali, para conocer de primera mano las problemáticas de la comunidad y tender puentes con la administración distrital para lograr soluciones.

## EVIDENCIAS No 5

